

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



JUZGADO 9° ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D C., diecisiete (17) de junio de dos mil diecinueve (2019).

Referencia 110013335 009 **2019 00171 00**
Convocantes: Lucy Delgado Tijaro y otro
Convocado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (**CASUR**)

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
(Aprueba conciliación)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley 640 de 2001 y 12 del Decreto 1716 de 2009, el Despacho procede a resolver sobre la aprobación o no del acuerdo conciliatorio celebrado el 23 de abril de 2019, entre el los convocantes **Lucy Delgado Tijaro** y **Jesús David Muñoz Delgado** y la convocada **CASUR** ante la Procuraduría 87 Judicial I Para Asuntos Administrativos.

I. ANTECEDENTES

1. Trámite procesal

1.1. El 26 de abril de 2019 los convocante radicaron solicitud de aprobación de conciliación prejudicial correspondiéndole conocer del asunto a este Despacho judicial (fl.77), por lo que la Secretaría ingresó el expediente el 07 de mayo de 2019 (fl.78).

1.2. En auto del 13 de mayo de 2019, el Despacho decretó como prueba de oficio a cargo de CASUR, una certificación donde indicará hasta que fecha el señor **Jesús David Muñoz Delgado** fue acreedor del 50% de la sustitución de la asignación de retiro en calidad de hijo del extinto cabo primero Jesús María Muñoz Rodríguez (QEPD). Le otorgó el plazo judicial de 5 días.

1.3. Para el cumplimiento de la anterior, se le otorgó un plazo judicial de 5 días contados a partir de la notificación de dicha providencia, sin que CASUR diera acatamiento; por lo que la Secretaría ingresó el expediente el 05 de junio de 2019 (fl.80).

2. De la solicitud de conciliación

2.1. Los señores **Lucy Delgado Tijaro** y **Jesús David Muñoz Delgado** a través de apoderado judicial, el 11 de marzo de 2019 presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 87 Judicial I para Asuntos Administrativos, en la que convocó **CASUR** a efectos de conciliar sobre el reajuste de su asignación de retiro, de conformidad con el IPC certificado por el DANE para los años 1997 en adelante (fls.1 a 10).

2.2. La causa fáctica se sintetiza así:

2.2.1. El extinto cabo primero Jesús María Muñoz Rodríguez prestó sus servicios a la Policía Nacional, por lo que mediante la Resolución del 07 de abril de 1975 le reconoció y ordenó pagar la asignación de retiro (fls.18 a 19).

2.2.2. Mediante la Resolución 661 del 23 de febrero de 2016, CASUR le reconoció sustitución a la asignación mensual de retiro a la señora Lucy Delgado Tijaro en calidad de compañera permanente el 50% total de la prestación y a Jesús David Muñoz Delgado en calidad de hijo menor de edad en cuantía del 50% (fls.20 a 21).

2.2.3. El 14 de febrero de 2017 con radicado 206465, los convocantes le solicitaron a CASUR el reajuste de la asignación de retiro conforme al IPC (fls.11 a 12). La convocada mediante Oficio E-201704416 del 14 de marzo de 2017 denegó su solicitud (fls.13 a 14).

3. Del acuerdo conciliatorio

3.1. La apoderada de la entidad convocada, en el trámite de la conciliación extrajudicial aportó certificación de Comité de Conciliación del 22 de abril de 2019, que señala lo siguiente (fl.59):

"<<En el caso de los convocantes (sic), solicitaron reajustar su asignación mensual de retiro conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), en su calidad de beneficiarios del extinto CP ® JESUS MARÍA MUÑOZ RODRÍGUEZ, quien tiene fecha de retiro el día 01 de enero de 1960, con sustitución mensual de retiro reconocida en el 100% de la asignación ostentaba el causante, se le reajustará la prestación a partir del 01 de enero de 1999, en los años que estuvieron por debajo del IPC y para el caso concreto de conformidad con el grado del extinto Cabo Primero, corresponde a los años 1999 y 2002.

En cuanto a la prescripción cuatrienal contenida en el Decreto 1212 de 1990 se le pagará a partir del 14 de febrero de 2013 en razón a la solicitud de reajuste del IPC fue radicada el 14 de febrero de 2017. Se reconoce la totalidad del capital como derecho esencial, se concilia el 75% de indexación y se pagará dentro de los 6 meses siguientes, tiempo en el cual no habrá lugar al pago de intereses, este plazo empezará a contar una vez el interesado presente la solicitud de pago ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, acompañada con los documentos legales y pertinentes, incluido el auto de aprobación del presente acuerdo emitido por el juzgado respectivo. Igualmente, se reajustará la prestación en la respectiva nómina a partir del día siguiente de la fecha de la celebración de la audiencia de conciliación a la que se anexará la propuesta de liquidación.

En los anteriores términos al (sic) Comité de Conciliación y Defensa Jurídica de CASUR, determina que para el presente asunto **SI le asiste ánimo conciliatorio.** >>"

3.2. De conformidad con la decisión del Comité, el Grupo de Negocios Judiciales de la entidad convocada, realizó la liquidación de los emolumentos dejados de percibir por los convocantes, desde el 01 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2004 (más favorable), así (fls.60 a 73):

3.2.1. A la señora Lucy Delgado Tijaro, valor total a pagar desde el 14 de febrero de 2013 al 23 de abril de 2019:

VALOR DE CAPITAL INDEXADO	\$2.112.476
VALOR CAPITAL 100%	\$ 1.896.587
VALOR INDEXACIÓN	\$ 215.889
VALOR INDEXACIÓN POR EL (75%)	\$ 161.917
VALOR CAPITAL MÁS (75%) DE LA INDEXACIÓN	\$ 2.058.504
MENOS DESCUENTO CASUR	\$-75.019
MENOS DESCUENTO SANIDAD	\$-72.804
VALOR A PAGAR	\$1.910.681

INCREMENTO MENSUAL DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO \$21.005,00

3.2.2. Al señor Jesús David Muñoz Rodríguez, valor a pagar desde el 14 de febrero de 2013 hasta el 11 de abril de 2018:¹

VALOR DE CAPITAL INDEXADO	\$21.495.705
VALOR CAPITAL 100%	\$ 1.290.243
VALOR INDEXACIÓN	\$ 205.462
VALOR INDEXACIÓN POR EL (75%)	\$ 154.097
VALOR CAPITAL MÁS (75%) DE LA INDEXACIÓN	\$ 1.444.340
MENOS DESCUENTO CASUR	\$-55.564

¹ Según se extrae de la liquidación (fl.67).

MENOS DESCUENTO SANIDAD	\$-51.565
VALOR A PAGAR	\$1.337.211

3.3. Así mismo, en la audiencia celebrada el 23 de abril de 2019, la convocada ratificó lo expuesto por el Comité de Conciliación. En acto seguido, la parte convocante acepta la propuesta conciliatoria, por lo que el Ministerio Público en sus consideraciones justificó el acuerdo por la suma de \$1910.681 para la señora Lucy Delgado Tijaro y \$1.337.211 para el señor Jesús David Muñoz Delgado de conformidad con la certificación expedida por el Comité de Conciliación (fls.74 a 75).

4. Las partes aportaron como **pruebas** al trámite conciliatorio las siguientes:

- Solicitud de conciliación extrajudicial (fls.1 a 10);
- Petición 206465 del 14 de febrero de 2017 (fls.11 a 12);
- Oficio 201704416 del 14 de marzo de 2017 (fls.13 a 14);
- Hoja de servicios policiales 367 (fls.15 a 17);
- Resolución del 07 de abril de 1975 (fls.18 a 19);
- Resolución 661 del 23 de febrero de 2016 (fls.20 a 21);
- Oficio E-01524-201708921 del 05 de mayo de 2017 (fl.22);
- Liquidación anual por aumento de sueldo (fls.23 a 40);
- Desprendibles de nómina (fls.41 a 42);
- Oficio E-00003-201824583 del 21 de noviembre de 2018 (fl.44);
- Acta del Comité y Defensa Judicial de CASUR del 22 de abril de 2019 (fl.59).
- Liquidación de indexación IPC del Grupo de Negocios Judiciales de CASUR (fls.60 a 73).
- Acta de conciliación extrajudicial del 23 de abril de 2019 (fls.74 a 75).

II. CONSIDERACIONES

5. Competencia

5.1. La conciliación extrajudicial es un mecanismo de solución de conflictos de carácter particular y de contenido patrimonial, el cual, conforme a lo establecido en las leyes 23 de 1991 y 640 de 2001, procede también en asuntos que podrían ventilarse ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

5.2. La Ley 640 de 2001, que regula lo correspondiente a la solución alternativa de conflictos, estipuló en su artículo 3º, las clases de conciliación existentes, dividiéndolas en judiciales y extrajudiciales, esta última haciendo referencia a la conciliación prejudicial ya contemplada por la Ley 23 de 1991.

5.3. En tal virtud, conforme a la normatividad vigente, la conciliación es una manifestación unívoca de voluntad de las partes, en este caso prejudicial, ante un conflicto originado por actividad administrativa o en ejercicio de aquella, con participación del Procurador Judicial, la que sólo surte efectos jurídicos, con la ejecutoria de la decisión jurisdiccional que la aprueba.

5.4. Las pretensiones no superan los 50 SMLMV, por lo que su conocimiento recae en los juzgados (CPACA, art. 152.2.).

6. Problema Jurídico

El Despacho debe resolver si se aprueba un acuerdo conciliatorio relativo al reajuste de la sustitución de la asignación de retiro con base en el IPC más favorable -1999 y 2000- y la indexación.

7. Cuestión previa

7.1. En aras de verificar que el acuerdo sometido a aprobación judicial, se ajusta a la ley, y no es lesivo para el patrimonio público, de conformidad con lo señalado en los artículos 25, 26 y 37 de la Ley 640 de 2001, se estima pertinente hacer una breve alusión al derecho concertado.

7.2. Precisado lo anterior, el Despacho procede a explicar la evolución en tres etapas de lo sucedido con el IPC, para la prestación que se concilia:

7.2.1. **Primera etapa.**- Consagró el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 una fórmula para mantener el poder adquisitivo de las pensiones, cualquiera fuere el régimen de ellas. Sin embargo, la misma ley en su artículo 279 excluyó de los beneficios de dicho estatuto de seguridad social integral al personal de la Fuerza Pública, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la mencionada Ley.

Por su parte el artículo 142 *eiusdem* dispuso el pago de mesada adicional, incluidos <<los retirados y pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional>>.

7.2.2. **Segunda etapa.**- Posteriormente, el artículo 1º de la Ley 238 de 1995, adicionó el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, estableciendo que:

<<Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados>>.

De manera que, con la Ley 238 de 1995 se les reconocen aquellos beneficios y derechos, de indexación –art. 14- y mesada adicional en junio –art. 142-, a los miembros de la Fuerza Pública.

7.2.3. Tercera etapa.- Como un auténtico retorno al sistema que anteriormente se ha denominado de la primera etapa, es el que se produce con la expedición del Decreto 4433 de 2004, el cual volvió a consagrar el incremento de las asignaciones de retiro aplicando el principio de oscilación, teniendo en cuenta la variación en las asignaciones de los oficiales y suboficiales en actividad y en adelante prohíbe acogerse a normas que regulen ajustes para la Administración Pública, a menos que así lo regule expresamente la ley.

Profusos han sido los pronunciamientos del Consejo de Estado en torno al tema, como la sentencia proferida con ponencia del consejero William Hernández Gómez, Expediente 73001-23-33-000-2013-00382-01 (3181-14), sentencia de 5 de abril de 2017, en la cual recordó lo expuesto en sentencia del 4 de marzo de 2010, con ponencia del Consejero Luis Rafael Vergara Quintero, que al respecto señaló:

<<El reajuste ordenado respecto de los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 sobre la pensión de invalidez, con fundamento en la variación porcentual del índice de precios al consumidor, IPC, está limitado al 31 de diciembre de 2004, toda vez que a partir del 1.º de enero de 2005 se implementó nuevamente la aplicación del principio de oscilación a través de la expedición del Decreto 4433 de 2004; El reajuste ordenado incide directamente en la base de la respectiva prestación pensional y debe servir para la liquidación de los incrementos que a partir del año 2005 se efectuaran sobre dicha prestación. A partir del 1º de enero de 2005 el reajuste de las asignaciones de retiro del personal de la Fuerza Pública, que había cesado en la prestación de sus servicios, debe efectuarse conforme al principio de oscilación previsto en el artículo 42 del Decreto 4422 de 2004, sin embargo, no se debe perder de vista que el reajuste desde el año 1997 al año 2004 debe reflejar el aumento que debió tener la pensión de invalidez a partir del año 2005. En otras palabras, los incrementos que se efectúen sobre la pensión de invalidez de un oficial o suboficial de la Fuerza Pública en retiro a partir de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, esto es el 1 de enero de 2005 deben tener en cuenta el incremento de la variación porcentual del índice de precios al consumidor de los años 1997 a 2004>>.

En consecuencia, resulta evidente que este reajuste opera desde la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 hasta la expedición del Decreto 4433 de 2004, por cuanto este estatuto prohibió dentro del régimen especial consagrado a favor de la Fuerza Pública, acogerse a normas que regulen ajustes para la Administración Pública, a menos que así lo regule expresamente la ley.

8. Solución al caso

8.1. Para resolver, es pertinente indicar que el Consejo de Estado ha dictado unos lineamientos a manera de requisitos necesarios para la aprobación de los acuerdos conciliatorios, que en recientes pronunciamientos este Despacho ha reiterado², los cuales son los siguientes:

- 8.1.1. Verificar la caducidad del medio de control, según lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 61 de la Ley 23 de 1991, modificado por el artículo 81 de la Ley 446 de 1998;
- 8.1.2. Que las partes estén debidamente representadas y con la facultad expresa para conciliar;
- 8.1.3. La naturaleza económica de las pretensiones, según lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 23 1991, modificado por el artículo 70 de la ley 446 de 1998;
- 8.1.4. Que el acuerdo cuente con el soporte probatorio necesario, para acreditar la existencia de la obligación a cargo de la entidad, según los términos del art. 65 A de la Ley 23 de 1991, adicionado por el art. 73 de la ley 446 de 1998³;
- 8.1.5. El despacho agrega que se debe verificar si el acuerdo es lesivo para el erario⁴.

8.1.1. De la caducidad

En consideración a que lo pretendido por el demandante es el reajuste de su asignación de retiro con base en el IPC para los años 1999 en adelante, esta prestación ostenta el carácter de periódica y, por tanto, el ejercicio del medio de control que procede en contra del acto administrativo que niega este reconocimiento no está sujeto al término de caducidad, puesto que conforme al numeral 1.º literal c), del artículo 164 del CPACA la demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que reconocen o niegan prestaciones periódicas, puede interponerse en cualquier tiempo, independientemente de la prescripción de las mesadas no reclamadas en tiempo, aspecto sobre el cual se referirá el Despacho más adelante.

² Providencia del 22 de agosto de 2017, Rad. 110013335009201700244-00, Convocante: Unidad Nacional de Protección, Convocada: Ana Ayde Sauca; auto del 18 de septiembre de 2017, Rad. 110013335009201700171-00, convocante: Superintendencia de Industria y Comercio, convocado: Andrés Mauricio Espinosa Otero; auto del 23 de octubre de 2017, Rad. 110013335 009 2017 00189 00, convocante: Superintendencia de Industria y Comercio, convocado: Henry David Torregroza Cervera. Juez: Guillermo Poveda Perdomo.

³ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 28 de noviembre de 2011, rad. 15001-23-31-000-2011-00128-01.

⁴ Artículos 25, 26 37 de la Ley 640 de 2001.

8.1.2. Naturaleza económica de las pretensiones

8.1.2.1. En el *sub lite*, se advierte que la apoderada de la entidad convocada aportó propuesta de conciliación y el apoderado de la parte convocante manifestó estar de acuerdo con dicha oferta, relacionada con el reajuste de la sustitución de la asignación de retiro en favor de los señores Lucy Delgado Tijaro y Jesús David Muñoz Delgado, con fundamento en el IPC para los años 1999 a 2004 (más favorables) e indexación.

8.1.2.2. Al respecto, el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, estipula:

<<Artículo 59.- Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, (...)>>.

8.1.2.3. Ahora bien, aunque en principio los derechos salariales y prestacionales no son conciliables en razón a su irrenunciabilidad, de acuerdo al artículo 48 de la Constitución Política, la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de los acuerdos conciliatorios, siempre y cuando a través de ellos se procure el mejoramiento del derecho y no su menoscabo.

8.1.2.4. En ese orden de ideas, resulta forzoso concluir que el acuerdo conciliatorio versa sobre derechos susceptibles de ser conciliados entre las partes, tras verificar que el convenio suscrito lejos de menoscabar el derecho de la parte actora, lo mejora. Adicionalmente, el derecho a la indexación, y el pago de los intereses que emergen como consecuencia del reajuste de la asignación de retiro con fundamento en el incremento del IPC, que es finalmente el aspecto sobre el cual la parte actora está cediendo en su derecho, resulta discutible y renunciable, por tanto, puede ser objeto de transacción, pues el reajuste de la prestación como tal si se reconoce de forma completa.

8.1.3. Representación de las partes y capacidad para conciliar

8.1.3.1. Se encuentra acreditado que el señor los convocantes actúan a través de apoderado dentro del presente medio de control y en el escrito de poderes visto a folios 1 a 4 se le facultó expresamente para conciliar.

8.1.3.2. Así mismo, se extrae que CASUR constituyó apoderada (fls.53 a 58) con facultad para conciliar, quién previa anuencia del Comité de Conciliación propuso una fórmula de arreglo, que fue aceptada de forma libre y espontánea, por la parte convocante.

8.1.3.3. En ese sentido, es evidente la voluntad de las partes de acogerse a la propuesta plasmada en la certificación expedida por el Comité de Conciliación de la entidad convocada.

8.1.4. Respaldo probatorio del acuerdo

8.1.4.1. Reposa en el expediente copia de la Resolución 661 del 23 de febrero de 2016, por medio de la cual reconoció la sustitución de la asignación mensual de retiro en favor de los señores Lucy Delgado Tijaro y Jesús David Muñoz Delgado (fls.20 a 21).

8.1.4.2. De la misma manera se acreditó la presentación del escrito de petición radicado el 14 de febrero de 2017, por medio del cual los convocantes solicitaron a la entidad demandada el reajuste de su prestación de conformidad con el IPC certificado por el DANE y la indexación (fls.11 a 12).

8.1.4.3. Ahora bien, teniendo en cuenta que el IPC es un hecho notorio, el Despacho presenta un cuadro comparativo donde se evidencia la diferencia del incremento de la asignación de retiro realmente efectuado conforme al principio de oscilación, y el reclamado por los convocantes, en aplicación del IPC, certificado por el DANE para el grado de Cabo Primero, así:

DIFERENCIA ENTRE SALARIOS FIJADOS POR OSCILACION E IPC			
AÑOS	VARIACION	IPC año ant	DIFERENCIA
1999	14,91%	16,70%	-1,79%
2000	9,23%	9,23%	0,00%
2001	9,00%	8,75%	-0,25%
2002	6,00%	7,65%	-1,65%
2003	7,00%	6,99%	-0,01%
2004	6,49%	6,49%	-0,00%

8.1.4.4. Lo anterior permite concluir que el incremento de la asignación de retiro en favor del convocante, realizado con base en el principio de oscilación para los años 1999 y 2002, fue inferior al IPC, siendo procedente reajuste respecto de los mentados años, y su correspondiente incidencia en las anualidades posteriores.

8.1.4.5. Entonces, es evidente que el reajuste realmente procede a partir del 1 de enero de 1999. Ahora bien, la entidad demandada en la propuesta conciliatoria señala que reajusta la asignación de retiro desde el 1 de enero de 1999, como en efecto corresponde.

8.1.4.6. Entonces, bajo estos parámetros la entidad propone el pago del 100% del capital por la suma de un millón ochocientos noventa y seis mil quinientos ochenta y siete pesos m/cte (\$1.896.587); el 75% de la indexación por valor de ciento sesenta y un mil novecientos diecisiete pesos m/cte (\$161.917); y las deducciones de CASUR y Sanidad (-\$75.019 y -\$72.804) para un total de un millón novecientos diez mil seiscientos ochenta y un pesos m/cte (\$1.910.681). Lo anterior, para pagar a la señora Lucy Delgado Tijaro desde 14 de febrero de 2013 al 23 de abril de 2019.

8.1.4.7. Este reajuste implica que la mesada pensional del demandante tenga un incremento de veintiún mil cinco pesos m/cte (\$21.005).

8.1.4.8. Al señor Jesús David Muñoz Delgado el 100% del capital por la suma de un millón doscientos noventa mil doscientos cuarenta y tres pesos m/cte (\$1.290.243); el 75% de la indexación por el valor de ciento cincuenta y cuatro mil noventa y siete pesos (\$154.097); y las deducciones de CASUR y Sanidad (-\$55.564 y -\$51.565) para un total de un millón trescientos treinta y siete mil doscientos once pesos (\$1.337.211). Lo anterior liquidado desde el 14 de febrero de 2013 al 11 de abril de 2018 (fecha de exclusión de la sustitución pensional).

8.1.5. Sobre la lesividad del acuerdo

8.1.5.1. Para efectos de verificar que el acuerdo conciliatorio objeto de estudio no resulta lesivo al patrimonio público, es menester examinar que la entidad no haya concertado el pago de obligaciones extinguidas por la prescripción cuatrienal prevista en el artículo 155 del Decreto 1212 de 1990, para las mesadas porque el derecho al reajuste es imprescriptible, es prestación periódica.

8.1.5.2. El convocante elevó petición de reajuste ante la entidad demandada el 14 de febrero de 2017, deprecando el reajuste de su prestación, razón por la cual, la entidad no se encuentra obligada al pago de las diferencias que resulten como consecuencia del reajuste, sobre de las mesadas anteriores al 14 de febrero de 2013, habida consideración a que frente a ellas operó el fenómeno de la prescripción cuatrienal, tal y como lo señaló la misma entidad en la liquidación que soporta la propuesta conciliatoria debidamente aceptada por el apoderado de los convocantes (fl.59).

8.2. Conclusión

8.2.1. De las consideraciones expuestas, se concluye que el acuerdo conciliatorio analizado, se fundó en un objeto y causa lícita, sin vicios en el consentimiento de las partes conciliatorias, y sin que con él se desconozcan los derechos irrenunciables del empleado, se lesionen los intereses del Estado, o afecte el patrimonio económico de la entidad.

8.2.2. En consecuencia, el Despacho aprobará la propuesta de conciliación entre el apoderado de los señores Lucy Delgado Tijaro y Jesús David Muñoz Delgado con facultad expresa para conciliar y la apoderada de CASUR.

Bajo las anteriores consideraciones, el **Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,**

RESUELVE

PRIMERO: APROBAR el acuerdo conciliatorio contenido en el acta del 23 de abril de 2019 (fls.74 a 75), consistente en los valores que se indican a continuación:

2.1. Para Lucy Delgado Tijaro

VALOR CAPITAL AL 100%	\$ 1.896.587
VALOR INDEXADO	\$ 161.917
DESCUENTOS CASUR	\$ 75.019
DESCUENTOS SANIDAD	\$ 72.804
TOTAL A PAGAR	\$ 1.910.681

2.2. Para Jesús David Muñoz Delgado

VALOR CAPITAL AL 100%	\$ 1.290.243
VALOR INDEXADO	\$ 154.097
DESCUENTOS CASUR	\$ 55.564
DESCUENTOS SANIDAD	\$ 51.565
TOTAL A PAGAR	\$ 1.337.277

2.3. El valor a reajustar será de \$21.005.

SEGUNDO: Esta providencia presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada material.

Radicado: 110013335 009 2019 00171 00

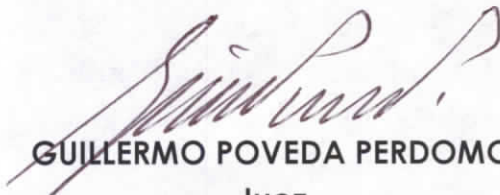
Convocantes: Lucy Delgado Tijaro y otro

Convocado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (**CASUR**)

TERCERO: Por Secretaría, **EXPÍDASE** a las partes copia del acta de conciliación y de la presente providencia, conforme a lo previsto en el artículo 114 del Código General del Proceso.

CUARTO: En firme este auto, por Secretaría, **ARCHÍVESE** el expediente dejando las constancias a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

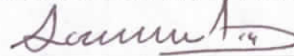

GUILLERMO POVEDA PERDOMO
Juez

Y A H L

**JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ D.C., SECCIÓN SEGUNDA**

NOTIFICACION POR ESTADO

El presente auto, se notifica a las partes por anotación en estado de fecha **dieciocho (18) de junio de dos mil diecinueve (2019)** a las 8:00 a.m. de conformidad con lo establecido en el artículo 201 del CPACA.



Sara Cristina Villota Escandón
Secretaria